



**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES**

**RESOLUCIÓN NÚMERO 148731 DE 2025**

**(05 de noviembre 2025)**

*"Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"*

**EL DIRECTOR DE OTRAS PRESTACIONES DE LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES**

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos, 114 del Decreto Ley 019 de 2012 modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, en desarrollo el parágrafo del artículo 2.6.1.4.3.14 del Decreto 780 de 2016, numeral 1º y 5º del artículo 17 del Decreto 1429 de 2016 y el numeral 2º del artículo 6º de la Resolución 1012 de 2022 y

**CONSIDERANDO**

**1. ANTECEDENTES**

- 1.1 Que el Director de Otras Prestaciones de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES, mediante **Resolución No. 50338 del 26 de mayo del 2025**, impuso la obligación de pagar una suma líquida de dinero a la señora **ZORAIDA DE JESUS MENDOZA HERNANDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 26.006.886, un valor de **VEINTI-NUEVE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$29.073.134,57)**, indicando que esta suma debe ser indexada durante el periodo comprendido entre la fecha de pago de la reclamaciones y la fecha de expedición de dicho acto administrativo, más los intereses que se causen a partir de su firmeza y hasta la fecha de pago, con ocasión a las reclamaciones generada por el accidente de tránsito ocurrido el día **2022-12-10** en el cual se vio involucrado el vehículo de placa **LBV74D**, de propiedad del obligado, automotor que para la fecha de los hechos, no contaba con una póliza de seguro obligatorio SOAT.
- 1.2 Que el día **02 de abril de 2025** se notificó por aviso el contenido de la **Resolución No. 50338 del 26 de mayo del 2025**, a la señora **ZORAIDA DE JESUS MENDOZA HERNANDEZ**.
- 1.3 Que la señora **ZORAIDA DE JESUS MENDOZA HERNANDEZ**, interpuso recurso de reposición en contra de **la Resolución No. 50338 del 26 de mayo del 2025**, con radicado 20256305932262 del 23 de octubre de 2025, argumentando entre otras cosas; la falta d plazo para expedir el título.

**2. PROCEDENCIA DEL RECURSO**

Una vez analizado el recurso interpuesto por la señora **ZORAIDA DE JESUS MENDOZA HERNANDEZ**, y confrontada la fecha de notificación se encuentra que, este reúne los requisitos legales para ser estudiado de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Con fundamento en la delegación de que trata el numeral 2º del artículo 6 de la Resolución 1012 del 20 de mayo de 2022, corresponde a la Dirección de Otras Prestaciones, la competencia para resolver el recurso de reposición interpuesto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 4 del acto administrativo recurrido.

Continuación de la resolución: "Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

### **3. DEL RECURSO INTERPUESTO**

"(...) Mediante el Acto Administrativo refutado se pretende imponer en mi contra la obligación de pago de la suma de VEINTINUEVE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$29.073.134,57); valor indexado al mes de abril de 2025, por concepto de servicios en salud (médicos, quirúrgicos, hospitalarios, etc.) y transporte al centro asistencial, prestados al señor ALVARO CESAR VARGAS MARTINEZ, C.C. No. 78.706.109, expedida en la ciudad de Montería (Córdoba), en calidad de paciente y conductor de la motocicleta de placa Lbv74D, la cual para la fecha del accidente ocurrido el día 10 de diciembre de 2022, era de mi propiedad y no contaba con póliza de seguro obligatorio de accidente de tránsito (SOAT), legal y vigente. De la parte motiva de la resolución atacada mediante el presente escrito y de las acciones de verificación realizada en el portal Web de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) – ADRES, se tiene que la obligación a que se hace referencia tiene como número de reclamación 1810714 y fecha de giro el 27 de septiembre de 2023. Ahora bien, al cotejar la fecha de giro con lo establecido en la norma que rige el asunto, como lo es el Decreto 19 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública y Decreto 2106 de 2019 ""Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública", encontramos lo siguiente: Artículo 114 Decreto 19 de 2012. (...) "La ADRES deberá expedir, dentro de los dos (2) años siguientes al pago de la indemnización o al pago de la EPS del servicio en salud y transporte, un acto administrativo que ordenará el cobro al propietario y/o conductor del vehículo no asegurado por el SOAT y podrá hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva, adelantando el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Contra este acto administrativo únicamente procederá el recurso de reposición". Negrillas nuestras. El artículo 114 del Decreto Ley 019 de 2012 quedará así: (...) "La ADRES deberá expedir, dentro de los dos (2) años siguientes al pago de la indemnización o al pago de la EPS del servicio en salud y transporte, un acto administrativo que ordenará el cobro al propietario y/o conductor del vehículo no asegurado por el SOAT y podrá hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva, adelantando el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Contra este acto administrativo únicamente procederá el recurso de reposición". Negrillas nuestras. Como podemos ver el presente proceso administrativo (cobro coactivo) no se ajusta a lo que está normado, puesto que como se indicó anteriormente la Resolución número 50338 del 26 de mayo de 2025, objeto de este recurso fue notificada mediante mensaje de correo electrónico enviado el día 06 de octubre 2025 y el giro de los dineros a la Clínica de Traumas y Fracturas de la ciudad de Montería, como la entidad que prestó la asistencia en salud al accidentado, ocurrió el día 27 de septiembre de 2023, es decir, nueve (9) días después de vencido el término, por lo tanto, el acto administrativo mediante el cual en esta ocasión se exige el pago es ilegal. En ese contexto, al ser referido acto administrativo un requisito sine qua non para poder exigir el pago y al ser este contrario al ordenamiento por contar con defectos insubsanables no puede nacer a la vida jurídica; por tanto, la obligación no puede ser exigible por que la administración dejó fenecer el término generándose una extinción del derecho, por lo tanto, estamos frente a una actuación revestida del fenómeno de la caducidad para la expedición y notificación de forma tardida del acto administrativo que ordene el reembolso. "Concepto de la Sala de Consulta indica cómo contabilizar plazos para que el sistema de seguridad social recupere dineros de accidentes de tránsito. Pag. 3 La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dio a conocer el contenido de un concepto que indica que existe un plazo de dos años para expedir el acto administrativo que ordene el reembolso de las obligaciones registradas en los estados financieros del Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) – Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), derivadas de los dineros que este haya pagado para indemnizar a víctimas de accidentes de tránsito causados por vehículos que no cuenten con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). El documento indica que el cobro coactivo, es decir, mediante la vía judicial, prescribe cuando se cumplan cinco

Continuación de la resolución: "Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

años de ejecutoria del acto que haya establecido tal reembolso. El concepto responde así a una consulta formulada por el Ministerio de Salud, en la cual pregunta, entre otras cosas, cuál sería la prescripción aplicable para reembolsar a las cuentas del Fosyga (Adres) estos recursos de la subcuenta de enfermedades catastróficas y accidentes de tránsito (administrados anteriormente por el Fosyga). La sala respondió que los términos de caducidad pueden contabilizarse así: a) Dos años de caducidad para la expedición del acto administrativo que ordene el reembolso, que se contabiliza desde el pago de la indemnización por parte del Fosyga, sin perjuicio de la acción de repetición, que puede ejercerse a través de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en contra del causante del accidente o sus aseguradoras. b) Un término de cinco años para el ejercicio de la acción de cobro coactivo, que vence dentro de los cinco años, que se contabilizan con base en la fecha de ejecutoria del acto administrativo que ordena el reembolso de los dineros pagados para indemnizar a las víctimas del accidente. Ante otras preguntas formuladas por el Ministerio, la Sala señaló que, para castigar la prescripción del reembolso, es necesario expedir un acto administrativo que así lo señale, previo informe que explique que las acciones legales para recuperar los dineros ya no pueden ejercerse por vencimiento en los términos u otras circunstancias. El acto debe señalar si es preciso iniciar acciones disciplinarias, penales o fiscales, generadas por la prescripción. Aclaró, así mismo, que la imposibilidad de cobro por prescripción puede ser declarada de oficio y a petición de una de las partes, en cualquier momento. El concepto precisa que la competencia para depurar las cuentas del Fosyga recae sobre el representante legal de la entidad que administre los recursos de ese organismo y recomendó revisar las normas legislativas y reglamentarias existentes para recuperar estos recursos. Según la sala, el Fosyga (Adres) debe ser informado automáticamente sobre todo accidente causado por vehículo no asegurado o no identificado, de manera que pueda emprender más oportunamente las acciones para asegurar la recuperación de los dineros que, en esos casos, le corresponde pagar para indemnizar a las víctimas. Pag. 4 El concepto indica que se debe revisar la posibilidad de vincular al propietario carente de Soat al proceso de reclamación que hayan iniciado las víctimas o las entidades hospitalarias, para poder expedir orden de pago a los reclamantes y de recobro a quien circule en estas condiciones. Indicó que el Fosyga (Adres) podría acceder a las bases de datos de autoridades de tránsito para que, ante la identificación de propietarios de vehículos no asegurados, el fondo pueda adquirir su propio seguro y se genere la obligación del propietario de tener que cubrir este valor ya asegurado, previo a cualquier trámite de tránsito". Ahora, a pesar de que el acto administrativo tiene fecha de elaboración 26 de mayo de 2025, a la fecha de radicación de este recurso no se encuentra en firme, porque no se ha surtido el debido proceso entre otros de NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, pues si bien hasta ahora se esta surtiendo la primera etapa, esta se está realizando de forma extemporánea porque se debió surtir antes de los dos (2) años, es decir, 28 de septiembre de 2025. De otra parte, tenemos que los hechos se generan a raíz de un accidente de tránsito acaecido el día 10 de diciembre de 2022, en el cual se encuentra comprometida la motocicleta de placa LBV74D la cual figura registrada a mi nombre, la cual de acuerdo al contrato de compraventa de vehículo automotor desde el 2 de diciembre de ese mismo año habían enajenado al señor ALVARO CESAR VARGAS, C.C. 78.706.109, expedida en la ciudad de Montería (Córdoba), quien de acuerdo a mis averiguaciones por un lado es la persona que figura como conductora y paciente que recibió la asistencia médica y por el otro quien es la otra persona que figura relacionada solidariamente en la resolución impugnada. En el artículo cuarto de precitado contrato que trata sobre "otras obligaciones", se estableció "(...) el comprador se compromete a no poner en circulación la motocicleta objeto de este contrato sin que cuente con la documentación vigente como es el Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) y La Revisión Tecno Mecánica y Emisiones Contaminantes, como también, sin que se haya realizado el traspaso de la motocicleta a nombre del comprador", por su parte, en el parágrafo primero, se advierte que "en caso de acontecer una violación al compromiso anterior el comprador exonera a la vendedora de todo tipo de responsabilidad bien sea penal, civil, disciplinaria, administrativa y/u cualquiera acción judicial que se inicie en su contra, asumiendo el comprador toda la responsabilidad", parágrafo segundo, "habiéndose realizado la entrega real y material del bien objeto de este contrato y de presentarse

Continuación de la resolución: "Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

*un accidente de tránsito sin que el comprador haya realizado el traspaso y de no contar con el Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) el comprador asumirá la responsabilidad de todos los gastos e inclusive de los dineros que se llegaren adeudar a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social - ADRES, por concepto de atención médica o indemnización por lesión o muerte". Como puede verse, existe un contrato que me exime de toda responsabilidad en este asunto y en el que explícitamente se indica que es el señor ALVARO CESAR VARGAS, C.C. 78.706.109, expedida en la ciudad de Montería (Córdoba), quien tiene que rendir las exculpaciones del caso y de demostrarse bajo las garantías procesales establecidas para este tipo de tramites su responsabilidad, debe entrar a responder con su peculio y no mi persona. Pag. 5 Para terminar, debo manifestar que se encuentra una desavenencia entre la información plasmada en la Resolución ataca con la que figura en la página Web de esa entidad, pues en la primera mencionada se indica que el valor a pagar es de \$29.073.134,57 y en la otra \$ 21.219.273.00, situación que no se comprende el porque la disparidad de valores. "(...)"*

En consecuencia, solicita:

*"(...) Por los argumentos antes expuestos, solicito muy respetuosamente se REVOQUE la Resolución número 50338 del 26 de mayo de 2025 "Por la cual se ordena el pago derivado de las reclamaciones reconocidas y pagadas por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES por concepto de servicios en salud y transporte y/o indemnización a las víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados con póliza SOAT legal y vigente"; en su defecto, se ordene la terminación inmediata y archivo a mi favor la presente actuación administrativa, disponiéndose consecuentemente el levantamiento de medidas cautelares en caso que hayan sido decretadas y la actuación de mi información personal en las diferentes bases de datos tanto físicos como digitales como el portal de la ADRES como de las diferentes centrales de riesgo. (...)"*

#### **4. CONSIDERACIONES DE ESTA DIRECCIÓN**

Sea del caso recordar, que por expresa disposición del artículo 48 de la Constitución Política, corresponde al Estado garantizar la seguridad social y la vida de sus ciudadanos. En este sentido, cuando las personas que sufran daños corporales causados en accidentes de tránsito ocurridos dentro del territorio nacional y sus respectivos beneficiarios cuando se produce el fallecimiento, tendrán derecho a los servicios y prestaciones establecidos en el artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que lo adicionen o modifiquen, bien sea con cargo a la entidad aseguradora que hubiere expedido el SOAT, respecto de los daños causados por el vehículo automotor asegurado y descrito en la carátula de la póliza, **o con cargo a la Subcuenta ECAT del entonces FOSYGA hoy ADRES, para las víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados o no identificados.**

Es así que, todos los establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y previsión social del sector salud, están obligados a prestar la atención médica en forma integral a las víctimas de accidentes de tránsito, considerando el grado de complejidad de la atención que requiera el accidentado y que una vez suministrada la atención médica por una clínica u hospital, éstos están facultados para cobrar directamente a la compañía aseguradora que expidió el SOAT - si el vehículo cumple con la obligación de estar amparado con la póliza de seguro obligatorio, por los costos de los servicios de salud prestados hasta por los montos de cobertura fijados por las disposiciones legales pertinentes y **al FOSYGA - Subcuenta ECAT, si el vehículo carece de póliza de seguro obligatorio SOAT, o no ha sido identificado o superados los topes en lo que faltase.**

La facultad de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, según la cual se entiende subrogado para cobrar las atenciones referidas, procede en contra del propietario del vehículo que incumplió su obligación de



Continuación de la resolución: "Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

adquirir el seguro obligatorio SOAT, de conformidad con el artículo 40 del Decreto 056 de 2015, compilado en el artículo 2.6.1,4.3.14 del Decreto 780 de 2016, vigente para accidentes ocurridos después del 3 de mayo de 2015, el cual señala:

*"Repetición. podrá repetir el pago realizado a las víctimas accidentes de tránsito, de conformidad con lo previsto en el artículo 1668 del Código Civil, el Fosyga se entiende subrogado en los derechos de quien hubiere recibido cualquier suma de la Subcuenta ECAT de dicho Fondo por concepto de pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo, con ocasión del incumplimiento del propietario del vehículo de la obligación de adquirir el SOAT. No obstante, la persona que conducía el vehículo no asegurado al momento del accidente será solidaria por todo concepto de responsabilidad que le asista al propietario del vehículo por cuenta del incumplimiento de la obligación de adquirir el SOAT. En estos casos, el Fosyga adelantará las acciones pertinentes contra el propietario del vehículo para la fecha del accidente, encaminadas a recuperar las sumas que haya pagado por los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que*

#### 4.1 DE LA CADUCIDAD

Sobre el particular, es necesario reiterar, lo señalado en la **Resolución No. 50338 del 26 de mayo del 2025**, en el sentido de informar que, el cobro de la obligación endilgada tiene fundamento en el artículo 106 del Decreto 2106 de 2019, el cual facultó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, para ordenar, mediante acto administrativo, el cobro de los créditos a su favor correspondiente a las reclamaciones reconocidas y pagadas con ocasión de los daños corporales y/o indemnización por muerte y gastos funerarios, causados en accidentes de tránsito, como consecuencia del incumplimiento **de quien ostenta la obligación de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT vigente.**

Asimismo, cuando en un accidente de tránsito se encuentre involucrado un vehículo que no cuente con Seguro Obligatorio de Tránsito vigente - SOAT, los gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización a los que haya lugar, por principio de inmediatez son asumidos por el Estado, con cargo a la **Subcuenta ECAT del entonces FOSYGA hoy ADRES**, para lo cual solo es necesario los siguientes elementos de acuerdo con la normatividad vigente:

- a) Existencia de un accidente de tránsito el cual se acredita con la declaración del médico de urgencia sobre el hecho
- b) No contar con la póliza SOAT
- c) Existencia de víctimas

Situación que se configura a cabalidad en el presente asunto conforme a los documentos que obran en el expediente de reclamaciones y que demuestran la existencia del accidente de tránsito ocasionado el día **2022-12-10** y del cual se realizó el reconocimiento y pago por concepto de gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización, y se adelantó dentro de los términos y condiciones establecidas en el artículo 73 de la ley 1753 de 2015, dando como resultado que, la ADRES pagara las reclamaciones número **1810714** contenidas en el acto administrativo recurrido, es por ello que se adelantó el proceso de determinación del deudor contra la señora ZORAIDA DE JESUS MENDOZA HERNANDEZ, propietaria para la fecha del siniestro del vehículo automotor involucrado.

De otra parte, se precisa que para poder ordenar el cobro contra los **propietarios y/o conductores** cuyos vehículos se vieron involucrados en accidentes de tránsito y no tenían una póliza SOAT legal y vigente al momento de los hechos, resulta necesario el reconocimiento y pago de reclamaciones a la IPS o a las o a los beneficiarios cuando se presente fallecimiento conforme al artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Continuación de la resolución: "Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

Así, de conformidad con lo dispuesto en el literal A del artículo 73 de la Ley 1753 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 152 de la Ley 2294 de 2023 se tiene que:

*"El término para efectuar reclamaciones o recobros que deban atenderse con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que administre la ADRES será de dieciocho (18) meses a partir de la fecha de la prestación del servicio, de la entrega de la tecnología en salud o del egreso del paciente. Finalizado dicho plazo, sin haberse presentado la reclamación o recobro, prescribirá el derecho a recibir el pago y se extingue la obligación para la ADRES o la entidad que haga las veces con cargo a los recursos del sistema."*

Es decir que, previo a desplegar las actuaciones administrativas tendientes a iniciar el cobro en contra de los obligados, las IPS deben efectuar la radicación de las reclamaciones ante la Entidad, para luego, en cumplimiento de lo preceptuado en la Resolución 1645 de 2016 y la ley 1753 de 2015, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, realiza la auditoria de las reclamaciones que son presentadas, con el propósito de validar el cumplimiento de los requisitos mínimos, y necesarios para corroborar la información del siniestro ocurrido; es por ello que, frente a las reclamaciones fundamento de la obligación que recae a nombre del obligado, esta administración realizó el respectivo trámite de auditoria una vez radicada, de la cual se constataron las condiciones necesarias y se procedió a su aprobación y posterior pago a la entidad reclamante.

Luego de concluido el trámite anterior, y teniendo en cuenta que la ley 1066 del 29 de julio de 2006 en su artículo 5 dispone:

**"FACULTAD DE COBRO COACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS.** Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario".

Esta administradora, con el fin de hacer exigibles obligaciones, entre las que se encuentran las derivadas de las reclamaciones presentadas con ocasión a daño a terceros en accidente de tránsito que debieron ser asumidos por el Estado a través de la ADRES, mediante Resolución 037 del 19 de enero de 2018 estableció el Reglamento Interno de Cartera de la ADRES, allí se indica que luego del reconocimiento de una acreencia a favor de la Entidad que no conste en un título preexistente, se deberá constituir un título ejecutivo (resolución que ordena el cobro), el cual será ejecutado posteriormente a través del proceso de cobro coactivo reglamentado por el Estatuto Tributario, el cual inicia a partir de que se libra el respectivo mandamiento de pago.

Ahora bien, es menester tener en cuenta lo establecido por el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011, el cual indica que las entidades públicas deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con la mentada Ley. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes.

En virtud de lo expuesto, la Ley 1066 de 2006 señaló que las entidades públicas cuyas actividades o funciones impliquen el recaudo de caudales públicos tienen jurisdicción coactiva y deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor; por lo tanto es deber de las entidades públicas, establecer mediante acto administrativo de carácter general, el reglamento interno para el recaudo de cartera, en el cual se establezcan reglas claras para la celebración de acuerdos de pago de las obligaciones existentes a favor de la entidad.

Es así, que en aras de ejercer la acción de repetición por parte de la ADRES, el artículo 106 inciso 4 del Decreto 2106 de 2019 señaló:

Continuación de la resolución: "Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

"La ADRES deberá expedir, dentro de los dos (2) años siguientes al pago de la indemnización o al pago de la EPS del servicio en salud y transporte, un acto administrativo que ordenará el cobro al propietario y/o conductor del vehículo no asegurado por el SOAT y podrá hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva, adelantando el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Contra este acto administrativo únicamente procederá el recurso de reposición."

Conforme lo anterior, una vez la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES ha pagado los servicios de salud, indemnizaciones y gastos a las víctimas de accidentes de tránsito, deberá expedir un acto administrativo que ordene el respectivo reembolso por parte del propietario o conductor del vehículo que inobservó el deber de adquirir el SOAT.

Será el mencionado acto administrativo que ordena el reembolso a favor de la ADRES, en el cual consta una obligación clara, expresa y exigible (artículo 99, núm.1, CPACA) el título ejecutivo que habilitará el cobro coactivo contra el propietario del vehículo o su conductor. En ese contexto, se debe entender que la caducidad es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para ello. Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas tanto en vía administrativa como judicial. Por regla general, el momento en que inicia la contabilización de dicho término es el de la ocurrencia del hecho dañoso, pues se presume que ahí se tiene conocimiento del daño.

En atención a lo dicho, se entiende que el plazo de caducidad de la acción de repetición será de dos (2) años conforme a lo previsto en el artículo 164-2 (i) del CPACA y lo dispuesto en el artículo 106 inciso 4 del Decreto 2106 de 2019. Término que empezará a correr desde el momento en que nace el derecho de recobro en cabeza de la ADRES, lo cual ocurre cuando se efectúa el **último giro** de las reclamaciones reconocidas y pagadas por concepto de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos que correspondan con ocasión del hecho dañoso. Esto último en aplicación de la misma regla contenida en la parte final del artículo 164-2 (i) del CPACA y porque el afectado no puede quedar indefinidamente expuesto a procedimientos judiciales o administrativos por parte del Estado.

Expuesto lo anterior, para el caso sub examine se evidencia que la **Resolución No. 50338 del 26 de mayo del 2025**, mediante la cual se impone el pago de la obligación en contra de la señora **ZORAIDA DE JESUS MENDOZA HERNANDEZ**, fue expedida dentro del plazo de los dos (2) años con los que contaba la administración para hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva. Por lo tanto, se entiende que la ADRES estaba en término para expedir el acto administrativo, dado que la fecha del último giro de las reclamaciones reconocidas y pagadas por la entidad, con ocasión al accidente de tránsito en el que se vio involucrado el vehículo automotor de placa **LBV74D** fue el día **27 de septiembre de 2023**, y la expedición del título ejecutivo ocurrió el **26 de mayo de 2025**. De esta manera, la administración estaba facultada para iniciar la actuación administrativa en contra de la señora MENDOZA HERNANDEZ, como se detalla a continuación:

Numero Reclamación	Fecha de giro	Fecha de accidente	Valor unitario indexado
1810714	2023-09-27	2022-12-10	\$29.073.134,57
		Total	\$29.073.134,57

En consecuencia, queda esclarecido que, si bien el accidente de tránsito ocurrió el día **10 de diciembre de 2022**, durante los años siguientes se ha efectuado el trámite propio por parte de la entidad reclamante para el reconocimiento y pago de la reclamación y posterior a ello, el día **27 de septiembre 2023**, se efectuó el último giro de la obligación presentada por aquella como se indicó anteriormente, dando como resultado que la Entidad estando dentro del término legal ordenado en el artículo 106 del Decreto 2061 de 2019 iniciara el respectivo cobro en contra del recurrente es decir el título ejecutivo

Continuación de la resolución: "Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición"

que nos convoca y que data del año 2025, por lo que no se revocará lo contenido en la resolución objeto de recurso.

Como se puede observar, la actuación administrativa en el presente asunto se está desarrollando en cumplimiento del principio de legalidad y con el pleno respeto de los derechos fundamentales y constitucionales al debido proceso y derecho a la defensa, los cuales se han visto plenamente ejercitados con la interposición del recurso de reposición objeto del presente pronunciamiento.

Finalmente se indica, que contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En virtud de lo anteriormente expuesto esta Dirección,

RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar** en todas sus partes la Resolución **Resolución No. 50338 del 26 de mayo del 2025**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR** a la señora **ZORAIDA DE JESUS MENDOZA HERNANDEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.006.886, el contenido de la presente resolución, conforme lo establecen los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Destinatario	Dirección física y/o electrónica	Ciudad
ZORAIDA DE JESUS MENDOZA HERNANDEZ	consultoresjuridicos08@gmail.com	MONTERIA/CORDOBA

**ARTÍCULO TERCERO: INDICAR** que contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C., a los (05) días del mes de noviembre de 2025.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Firmado Digitalmente por

**Yasmín Escamilla B.**

Directora (E) de Otras Prestaciones

**YASMÍN ESCAMILLA B.**

Directora (E) de Otras Prestaciones

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud  
(SGSSS) – ADRES